**"COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LOS ACTOS
DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN DE
INSEGURIDAD QUE SE VIVE EN LA REGIÓN DE LA
ARAUCANÍA"**

363ª LEGISLATURA

**Acta de la sesión 9ª, ordinaria, celebrada en jueves 14 de marzo de
2016**

SUMARIO.

Se recibe al director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, respecto de los puntos atinentes al Mandato de la Comisión.

Se abre la sesión a las 09:03 horas.

ASISTENCIA

Preside, de manera accidental, el diputado señor Fernando Meza.

Asisten la diputada señora Claudia Nogueira y los diputados señores Fuad Chahin, Gustavo Hasbún, Diego Paulsen, Jorge Rathgeb, Joaquín Tuma, Ignacio Urrutia y Mario Venegas.

Concurren como invitados el director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, señor Alberto Pizarro Chañilao; el subdirector nacional Conadi Temuco, señor Pedro Canihuante Cabezas, y el asesor Cristián Sanhueza.

Actúa como Secretario el abogado señor Sergio Malagamba Stiglich y como abogado ayudante el señor Mauricio Vicencio Bustamante.

CUENTA

Reemplazo del Diputado Germán Becker por el Diputado Diego Paulsen. SE AUTORIZÓ EL REEMPLAZO.

ACUERDOS

Invitar nuevamente a la próxima sesión al director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, a objeto que continúe con su exposición y responda las consultas pendientes.

ORDEN DEL DÍA

Se recibe al director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, respecto de los puntos atinentes al Mandato de la Comisión.

El desarrollo en extenso del debate se encuentra en el archivo de audio digital, según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 256 del Reglamento de la Cámara de Diputados y en el acta taquigráfica que se adjunta al final de este documento.

- Se levanta la sesión a las 10:30 horas

SERGIO MALAGAMBA STIGLICH,
Secretario de la Comisión.

**COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LOS ACTOS DE GOBIERNO
EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DE INSEGURIDAD QUE SE VIVE
EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA**

Sesión 9ª, celebrada en jueves 7 de abril de 2016,
de 09.03 a 10.30 horas.

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA LITERAL

Preside, de manera accidental, el diputado señor Fernando Meza.

Asisten la diputada señora Claudia Nogueira y los diputados señores Fuad Chahin, Gustavo Hasbún, Diego Paulsen, Jorge Rathgeb, Joaquín Tuma, Ignacio Urrutia y Mario Venegas.

Concurren como invitados el director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, señor Alberto Pizarro Chañilao; el subdirector nacional Conadi Temuco, señor Pedro Canihuante Cabezas, y el asesor Cristián Sanhueza.

TEXTO DEL DEBATE

El señor **MEZA** (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.

El acta de la sesión 7ª, ordinaria, se declara aprobada.

El acta de la sesión 8ª, ordinaria, queda a disposición de las señoras diputadas y los señores diputados.

El señor Secretario va a dar lectura a la Cuenta.

*El señor **MALAGAMBA** (Secretario) da lectura a la Cuenta.*

El señor **MEZA** (Presidente accidental).- La presente sesión tiene como propósito conocer la opinión del director de la Conadi, señor Alberto Pizarro, respecto de los puntos atinentes al mandato de esta Comisión en lo pertinente.

Señor Pizarro, si lo tiene a bien, pido que presente a sus acompañantes e indique la función que tiene cada uno dentro del Servicio que usted dirige.

Tiene la palabra el señor Pizarro.

El señor **PIZARRO**.- Señor Presidente, hoy me acompañan el subdirector nacional de la Conadi Temuco, señor Pedro Canihuante Cabezas, y el asesor Cristián Sanhueza para complementar mi exposición, y posteriormente pasar a responder todas las consultas que puedan surgir de la exposición general respecto de nuestro mandato por ley como Conadi sobre lo que tiene que ver con el Fondo de Tierras.

Quiero comenzar haciendo una breve reseña del contexto histórico y algunas definiciones previas.

Como ustedes saben, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, fue creada por la Ley Indígena en 1993 y tiene dentro de sus funciones, de acuerdo a su mandato, ejecutar tres fondos: el Fondo de Tierras y Aguas, el Fondo de Desarrollo y el Fondo de Cultura y Educación. En esta oportunidad, me remitiré a este último, en virtud de lo solicitado por la Comisión.

A modo de contexto histórico, se podría resumir todo lo que tiene relación con el Fondo de Tierras y Aguas y lo que aparece escrito en la Ley Indígena en tres procesos históricos claramente definidos.

El primero de ellos tiene que ver con un proceso de reducción indígena, que se realizó entre 1866 y 1920. Posteriormente, un proceso de división de los títulos de merced, lo que ocurrió desde 1931 hasta 1979 aproximadamente, y un tercer proceso de reforma y contrarreforma agraria, que se llevó a cabo entre 1964 y 1979.

En la siguiente imagen, ustedes pueden ver una gráfica bastante clara respecto de lo que ha sido este proceso a través del tiempo.

En 1818, hay estimaciones que hablan de una ocupación de 5.288.000 hectáreas.

Si vemos la evolución histórica que esto ha experimentado a lo largo del tiempo, podemos encontrar que en 1866, y antes del proceso de reducción que he señalado, la cantidad de hectáreas se redujo a 3.971.000 hectáreas, es decir, un 75 por ciento del total inicial.

Para 1920, finalizada la reducción territorial, los mapuches disponían de aproximadamente 584.063 hectáreas. Es decir, ya en esa época esto correspondía a un 11 por

ciento del total original de 1818, que por cierto fue reconocido por la Corona Española en su momento.

Posteriormente, desde 1920 a 1979, por efecto de la división de los títulos de merced, se disponen de 520.611 hectáreas, o sea, a esa fecha estamos hablando de un 10 por ciento respecto del total original.

Finalmente, entre 1964 y 1979, producto de la pérdida neta entre la Reforma y la Contrarreforma Agraria, se llegó a 420.000 hectáreas, es decir, un 8 por ciento del total.

Ahora me referiré de manera bastante resumida a lo que han sido los avances de la política de tierras contenida en la Ley Indígena y que, por cierto, es parte del mandato que tenemos como Conadi.

La Conadi nace en 1993, con la Ley 19.253. Desde ahí, ustedes pueden ver claramente que se calcula una pérdida neta, en función de lo señalado, de aproximadamente 164.000 hectáreas: alrededor de 100.000 hectáreas por pérdida del proceso de Contrarreforma Agraria y 64.000 por pérdida de superficie de los títulos de merced.

En este caso, quiero aclarar que hay dos componentes: uno, que tiene que ver con los subsidios de tierra, que son 20 A. Es un concurso que se realiza cada año o cada dos años, y el 20 B, que tiene que ver con los procesos de aplicabilidad. Es decir, cuando se acredita una pérdida territorial, se aplica este artículo.

Podemos dejar copias si necesitan más información. Con mucho gusto, les podemos enviar toda la información que requieran.

Sobre la materia, haciendo cálculos, se puede hablar de 164 mil hectáreas en general; 100 mil atribuibles al proceso de contra reforma agraria, y 64 mil, que tienen relación con la pérdida de los títulos de merced.

Sabemos que ha habido devolución en el tiempo. Y eso no tiene relación con la familia, porque ha cambiado y evolucionado mucho el número de familias, debido a los títulos de merced.

En el gráfico siguiente, podemos ver que, entre 1994 y el 2009, se financió la compra aproximada de restitución territorial de 91.713 hectáreas; de las cuales 14 mil son por el 20 A, y 77.495, por el 20 B.

En tal sentido, se marca como un hito lo que fue el Pacto Reconocer del 2009, donde se empezó a hablar de las comunidades 115, esto es, todas aquellas comunidades que tenían acreditadas pérdidas territoriales. Es decir, contaban con esa aplicabilidad y las 308, que eran comunidades que estaban en proceso de solicitar esa aplicabilidad. Es decir, si se declaraba en ese sentido, y aún no se acreditaba, y contaban con pérdidas, por lo tanto, se inician procesos para solicitar esa aplicabilidad.

Respecto de la siguiente lámina, puedo señalar que, durante el gobierno de Sebastián Piñera, se avanzó en el 20 B; se compraron aproximadamente 34 mil hectáreas, pero, en el caso del 20 A, se ejecutó en forma incompleta. De hecho, cuando asumimos el 2014, nos correspondió cerrar el 14° concurso, e iniciar los procesos para abrir el 15° concurso.

Eso significa que, a pesar de haber comprado una superficie a las comunidades, este uso excesivo del 20 B, en desmedro del 20 A, que cumple una función muy importante, generó una alta demanda que tuvimos que empezar a abordar, habiendo asumido el 2014.

En la próxima lámina, les presento un esquema de lo que, en general, es el proceso del 20 B.

El 20 A, como dije, es un concurso subsidio -vamos en la 15° versión-, y tiene otro sistema, pero el 20 B funciona de esta forma. Esto lo podríamos dividir en dos etapas: la primera etapa, que tiene que ver con el informe jurídico administrativo, lo que siempre fue conocido como la aplicabilidad, donde se puede acreditar que existió alguna pérdida territorial, para que aplique el artículo 20 B, con todos los pasos que aparecen ahí mencionados. Una vez resuelta esa etapa, empieza la segunda etapa, que tiene que ver con el proceso en sí mismo de la restitución territorial. Es decir, la presentación de los predios por parte de las comunidades y la realización de todos los estudios necesarios para asegurar que en primer lugar esos territorios en lo posible sean territorios donde se desarrollaron originalmente esas comunidades y que sean territorios que obtuvieron el título de merced y, por cierto, que cuenten con todas las condiciones también agronómicas y de

localidad para que las comunidades puedan desarrollar una vida digna en esos territorios.

Además, algo muy importante -y que enfatizamos apenas asumimos el 2014-: incorporamos los estudios de colindancia. ¿Por qué es tan importante? Porque, en muchos casos, existen comunidades, o más de una comunidad, que demanda un mismo predio. Entonces, para resolver esa situación que en muchas oportunidades generó situaciones de conflicto, incluimos este informe como obligatorio a partir del 2014 para evitar ese tipo de situaciones.

Podemos decir que, desde esta incorporación y de la rigurosidad con que se ha trabajado este proceso, que contamos con procesos que se han ido cerrando paulatinamente y de buena forma desde el 2014 a la fecha.

A continuación, pueden ver un esquema. Como comentaba, les voy a dejar toda esta información y más detalles de lo que requieren con mucho gusto, para que tengan claridad sobre cómo funciona el sistema, que es bastante complejo. Son procesos que no se pueden llevar a cabo en pocos meses. Muchos requieren de bastante tiempo, pues hay muchos factores que inciden en que se puedan cerrar adecuadamente todos estos procesos.

Independientemente de que uno pueda realizar todos los informes, que ya requieren de una buena cantidad de trabajo administrativo, hay que recordar algo muy importante. Muchas veces se habla de que tenemos más de cien comunidades que están en proceso actualmente en la Conadi, pero en muchos casos ocurre que cada una de esas comunidades presentan tres, cuatro o cinco predios. Por lo tanto, esa demanda se multiplica por el número de proyectos que se presentan, porque cada predio cumple una cartera administrativa distinta. Por lo tanto, requiere de un trabajo bastante arduo por parte de los funcionarios de la Conadi. Son los casos en que podemos decir que un solo predio puede satisfacer la demanda de una comunidad o más de una comunidad como ha ocurrido en algunos casos.

Sabemos que la disponibilidad de suelos cada vez es menor, y por lo mismo, se hace cada vez más difícil abordar la demanda completa de una comunidad con la

compra de un solo predio. Por lo mismo, esto multiplicado.

Eso quería plantear en términos generales.

Más adelante, voy a mostrar una pequeña gráfica del presupuesto. La Comisión tiene bastante claro el incremento del presupuesto de la Conadi en general y del Fondo de Tierras en particular. Los parlamentarios de la zona conocen bastante el tema.

En el siguiente punto, podemos ver que en 2014, 2015, 2016 existió un incremento notable en el presupuesto del Fondo de Tierras, lo que nos ha permitido cerrar procesos que llevaban abiertos diez a quince años. Y hemos podido cerrarlos adecuadamente gracias al incremento presupuestario.

Eso lo he presentado en forma bien general. Más bien, para exponer el contexto del trabajo que realizamos como corporación y, en particular, por el Fondo de Tierras, porque claro, y repito, es uno de los tres fondos y una de las tantas tareas que desarrollamos como corporación.

Por lo tanto, quedo disponible para atender sus consultas y dudas.

El señor **MEZA** (Presidente accidental).- El objetivo de la sesión tiene que ver con cómo la Comisión averigua o obtiene información sobre si el trabajo de la Conadi ha influido positiva o negativamente en el clima de violencia que hay en La Araucanía. Porque sabemos que es un tema multifactorial -el de la violencia- que tiene que ver con injusticias, pobreza, etcétera.

El diputado Tuma nos ha dado buenas y largas exposiciones sobre las razones sobre por qué se da, desde un punto de vista histórico, esta situación.

Por lo tanto, nos asaltan algunas dudas.

Hay ciento cincuenta comunidades con aplicabilidad.

¿Cómo explica que haya otras comunidades en las que la Conadi, bajo su administración, le ha dado aplicabilidad en 48 horas?

Si estamos equivocados, puede decirnos: Están equivocados. De eso, se trata.

Por ejemplo, la comunidad de Trapilhue, y es bueno que vaya tomando nota para que luego nos responda. A la Cañuta Calbuqueo le fueron aceleradamente satisfechas sus demandas. En otros casos, se les entrega aplicabilidad

sin compra en tiempo récord, como el caso de Pasco Cariqueo II, de Carahue; José Quilaqueo II, de Milpe, de Galvarino; Huellel Mapu, de Victoria. En este último caso, su jefe de gabinete Pedro Zúñiga, por ejemplo, le entregó aplicabilidad a la comunidad estando el caso en estudio y forzando a nuestro entender su resultado. Es la información que yo poseo.

En el caso de la Pasco Cariqueo II, su jefe de gabinete, Pedro Zúñiga, hizo un acuerdo político, en cuya virtud le ofreció a la presidenta de la comunidad, doña Silvia Saavedra, comprarle a la comunidad un predio de 700 hectáreas, y como la comunidad está compuesta por doce familias -lo que era bastante poca familia-, en tiempo récord, en pocos días, la comunidad artificialmente presentó más de cincuenta familias.

Ese es uno de los casos que preocupan, porque genera disconformidad en otras comunidades. La gente se pregunta: ¿Por qué tan rápido en el caso de ellos, cuando llevo diez años esperando?

Cuando mi colega propuso el cierre de esta situación, hablamos de darles la salida a las 150 comunidades.

Otro ejemplo es la comunidad Pedro Linconao, cuya representante se encuentra en prisión preventiva por el incendio y asesinato de la familia Luchsinger Mackay; sin embargo, en breve tiempo se le otorgó la aplicabilidad. ¿Por qué se tapa el violentismo a través de la entrega! No creo que sea correcto. Incluso, hay una indicación aprobada por la Cámara de Diputados en la cual nos negamos a entregar cualquier tipo de beneficio a cualquier comunidad que ejerza la violencia de palabra o de hecho; sin embargo, a mi modesto entender, de esta manera se estimula.

Tiene la palabra el diputado Joaquín Tuma.

El señor **TUMA**.- Señor Presidente, como su pregunta fue tan larga, prefiero que nuestro invitado la responda primero.

El señor **MEZA** (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Alberto Pizarro.

El señor **PIZARRO**.- Señor Presidente, me parece un tanto particular que un diputado como usted, que conoce la zona y que era cercano al antiguo subdirector, haga esos comentarios, porque en realidad, ninguna de esas

comunidades ha realizado actualmente compras por el artículo **20**. Además, me parece grave que diga que en 48 se otorga la aplicabilidad. Si usted tiene antecedentes, sería bueno que los expusiera.

El señor **MEZA** (Presidente accidental).- Los entregaré.

El señor **PIZARRO**.- La historia ha demostrado que es fácil lanzar una piedra y después esconder la mano. Hay que tener mucho cuidado con eso y, en ese sentido, he sido muy cuidadoso en mis declaraciones, porque creo que no es bueno enlodar la imagen de alguien sin tener certeza de lo que se dice. Efectivamente, nunca ha sido en 48 horas, al menos, en buena parte de esas comunidades. Un ejemplo muy conocido es lo sucedido con la comunidad Nilpe (fonética). Esa comunidad no tenía ninguna compra.

Reitero, ningún proceso de aplicabilidad dura 48 horas, sino meses, pero, ojo, porque en otros períodos duraban años. Está mal que adelantemos procesos administrativos que antes se dilataban y duraban años. En algunos meses, el espíritu de la corporación es tratar de agilizar los procesos, pero dentro del marco legal.

Es muy importante señalar que no se da ninguna aplicabilidad a una comunidad que no acredite pérdida territorial.

Respecto del mejor aval que tenemos, en algún momento fue un riesgo para la ejecución presupuestaria, pero agradecemos que desde mayo del año pasado, este tomando razón de todas las carpetas, pues da cuenta de que los procesos que realizamos se ajustan a derecho y están de acuerdo con lo que nos mandata la ley indígena.

Usted dio varios ejemplos utilizando el nombre de Pedro Canihuante, pero a mí no me gusta eso, realmente no es mi forma de hacer política.

El señor **MEZA** (Presidente accidental).- En las comisiones investigadoras se hace así.

El señor **CHAHIN**.- Señor Presidente, por su intermedio, al señor director. Usted está en una comisión investigadora, le pido que tome consciencia de eso. No puede pretender censurar el trabajo de los parlamentarios y creo que el suyo es, justamente, dar nombres. Efectivamente, hacer acusaciones al voleo es lo que, de alguna manera, hace que las comisiones investigadoras no

lleguen a ninguna conclusión. Usted, como funcionario público, fue citado ante un poder del Estado que tiene la labor de fiscalizar sus funciones. Entonces, le pido que se ponga en su lugar y que respete la función de los parlamentarios.

El señor **MEZA** (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Joaquín Tuma.

El señor **TUMA**.- Señor Presidente, usted hizo una pregunta respecto del papel de la Conadi en este conflicto que, a lo mejor, pasó muy livianamente. La verdad, es que este es un conflicto histórico en el que la tierra no es el único problema, sino una de sus aristas. No obstante, esos procesos no han sido transparentes ni hechos con un criterio único, sino que, desde la creación de la Conadi, han sido influenciados políticamente, así como por amenaza, por tomas de terreno y por situaciones complejas con grupos que no han querido respetar la institucionalidad.

La Conadi tampoco ha respetado la antigüedad, tema que me preocupa, porque los parlamentarios, al menos en lo que a mí respecta, hemos insistido en que las comunidades deben mantenerse dentro de la institucionalidad. Sin embargo, a veces se salen de esta, por compras de terreno provocadas por presiones, ya que las autoridades sucumben a esas presiones y hacen lo que no deben hacer; entregar predios a quienes ejercen más presión. Por eso, la glosa presupuestaria de 2016 estableció una indicación que también lo favorece a usted como director y a la institución, al darle el respaldo para decir que no puede pasar por sobre la institucionalidad.

Señor Presidente, por su intermedio. ¿Cuántas son las pendientes con aplicabilidad? ¿Cuántas están en trámite de aplicabilidad? ¿Cuántas quedarían pendientes, sin contar las que ya se han presentado? Hay que ver el escenario futuro, porque estamos construyendo una nueva institucionalidad. Queremos construir el Consejo de Pueblos y el Ministerio de Asuntos Indígenas; sin embargo, estos antecedentes son fundamentales para realizar las políticas públicas necesarias para resolver el conflicto.

Propongo que haga una sugerencia en relación con los dos proyectos de ley que ya estuvieron en la comisión,

para ver qué criterios nuevos se deberían aplicar y para decir que propuso hacer un cierre, pero que el gobierno anterior no lo hizo, y que este, tampoco lo va a hacer.

No se trata de comprar ahora todo lo que se debe, pero se podría comprometer la compra con una carta Gantt con fechas y compromisos para terminar con la incertidumbre. Lo peor es que hay personas que llevan diez años esperando y no saben cuándo les va a tocar, algunos tienen 80 años de edad, y aún están esperando ser compensados. No obstante, usted dice que hay comunidades que presentan varios predios cuando tienen que cobrar su aplicabilidad, entonces, hay que cambiar el sistema. Las comunidades no son corredores de propiedades, entonces, ¿por qué deben buscar predios y pelear entre ellas! A veces, hay tres comunidades que quieren el mismo predio en venta. Con eso, se crea un gran problema y, en consecuencia, un alza de precio.

Queremos cambiar las políticas públicas y ustedes deberían hacerles sugerencias a la comisión; nosotros tenemos nuestra propuesta para avanzar. Esperamos que las dos nuevas institucionalidades sean un aporte para La Araucanía y para la solución del conflicto.

He dicho.

El señor **MEZA** (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Gustavo Hasbún.

El señor **HASBÚN**.- Señor Presidente, por su intermedio, al director. El objetivo de la comisión es recabar antecedentes e información que nos permita dilucidar dentro de las conclusiones los grados de responsabilidad administrativa o política que pudieran existir. Sin embargo, más que buscar responsabilidades, queremos ver cómo podemos colaborar en la solución del problema. Si somos incisivos en las preguntas es debido al objetivo final, que es poder aclarar una serie de dudas basadas en los antecedentes que nos hace llegar gente que ha sido víctima de la violencia rural, u otras personas que son parte de ciertas comunidades mapuches.

Quiero dejar claro que no ha habido ni va a existir otra intención, sino que son preguntas que nosotros debemos hacer en base a los antecedentes que nos llegan y que es importante que ustedes nos puedan responder. Lo digo porque yo también tengo dudas y preguntas de gente

que me solicitó que consultáramos sobre ciertos temas que han generado ruido, no solo a nivel de opinión pública, sino también con las comunidades mapuches.

Quiero que usted me explique la situación que se origina por el hecho de que existan 150 comunidades con aplicabilidad, dentro de las cuales está la mesa de las 50 comunidades con aplicabilidad que llevan más de diez años sin que se les compren tierras, y en cambio hay otras comunidades que han tenido un *fast track* en la compra de tierras. Cuando me dirijo al director de la Conadi, no me refiero al director en términos personales, sino a la Conadi en su conjunto. Usted es el representante legal y esto tiene que ver con un proceso de la Conadi que no es de hoy, sino completo.

Lamentablemente le tocó a usted venir a esta comisión investigadora y nos va a tener que responder en relación a la política por la que ha optado la Conadi como institución en el último tiempo.

¿Por qué, habiendo comunidades que llevan más de diez años sin que se les compren tierras, hoy existen comunidades a las que se sí se les ha comprado, como Trapilhue y Cañuta Calbuqueo, como lo señaló el propio diputado Meza, en el caso de la compra del predio de Selva Chica para la comunidad Trapilhue? ¿Existe alguna denuncia en fiscalía que involucre el proceso de compra realizado por esa comunidad? Lo digo porque quiero saber en qué consiste. El actual fiscal, exsocio de Carlos Tenorio, le entregó información privilegiada a este con respecto a los montos que la Conadi pagaría y eso permitió que se realizara una compra *express*.

¿Por qué no se ha aplicado el plan de priorización de comunidades para la compra establecido por la Conadi? En el mismo sentido, ¿podría explicar qué criterio está utilizando actualmente la Conadi, si es que existe alguno, para ordenar la compra de tierras?

¿Qué resguardo ha tomado la institución para evitar comprarles tierras a las comunidades cuyos miembros participan en actos de violencia? Y en esto quiero ser muy claro, en que, por ejemplo, se invirtieron más de 3.800 millones de pesos en comprarle tierras a las comunidades de Lolocos, de Ercilla. De sus dirigentes, el presidente y el secretario, entre otros miembros, están

siendo investigados por la justicia, y de hecho el presidente no ha podido firmar los papeles porque se encuentra en prisión preventiva, y está en prisión preventiva en este minuto. Esa fue una inversión gigantesca que benefició a cerca de 22 familias, donde cada familia recibió cerca de 174 millones de pesos.

Por lo tanto, creo que es importante saber por qué se produce ese tipo de situaciones.

¿Qué está haciendo la Conadi para insertarse en las comunidades indígenas de La Araucanía?, esto es, ¿qué instancia, espacio y lugares de encuentro están actualmente en funcionamiento entre la Conadi y las comunidades indígenas, además de las compras de tierras o asistencia económica?

¿Qué medidas de resguardo se han tomado en relación a los funcionarios de la Conadi, especialmente cuando han sido víctimas de la violencia? Cito el caso de Gabriel Sandoval, ¿qué medidas tomó la Conadi luego del atentado incendiario en contra de ese funcionario?

Consulto también qué medidas internas tomaron ustedes como institución, no solo las querellas o adhesiones de parte de la Intendencia, porque además hubo amenazas públicas y se difundieron panfletos en contra de otros funcionarios, como el exsubdirector, Ernesto Paillán; y la encargada de registro de comunidades, Nubia Ñanculef, con ocasión del incendio de la lechería de la familia Luchsinger.

Entre los años 2009 y 2011, a la comunidad Juan Catrilaf, de la comuna de Padre Las Casas, se le compraron 480 hectáreas que pertenecían a la familia Luchsinger. La superficie total de compras de tierras a esa comunidad fue de 1.230 hectáreas para solo 33 familias. Al respecto, le pregunto si usted conoce al presidente de esa comunidad, Sergio Catrilaf; en caso afirmativo, desde cuándo y si estuvo en reuniones con esa persona antes de que se efectuara la compra de las 750 hectáreas.

¿Cómo explica usted que en esa última compra se beneficiara a 5 de los 11 detenidos por el caso de la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay? Tenemos los nombres de cada una de las cinco personas que fueron

beneficiadas. Quiero saber si usted tuvo algún contacto anterior a ese episodio.

Le pregunto también si usted como funcionario público, como director nacional, apoyó un acto ilegal que no permitió ocupar las dependencias del organismo público en que es director nacional. Me refiero a la toma del año 2015.

El señor **PIZARRO**.- Si usted estaba presente...

El señor **HASBÚN**.- Son preguntas que hago porque es bueno e importante saber el por qué.

Consulto además si efectivamente se ocultó información relacionada con la compra de tierras al empresario Carlos Heller, según denunció la consejera mapuche Ana Llao. Ella dijo que no se le entregó la información cuando la había solicitado. Por ello, le consulto si es cierta la denuncia que habría hecho la consejera.

Quiero insistir en que esto apunta básicamente a que usted es el director y por ello nos tiene que responder. No tenemos a otra persona que nos pueda responder administrativamente por la información que nos llega y que queremos aclarar. Quién más que usted mismo nos puede responder acerca de eso. Esas son mis inquietudes.

El señor **MEZA** (Presidente accidental).- Señor director, le aclaro a usted y a sus colaboradores que las comisiones investigadoras no nacen porque a un parlamentario o a una parlamentaria simplemente se les ocurra. Previamente a ello se realiza un debate para determinar si el tema planteado amerita o no amerita la creación de una comisión de este tipo. Para obtener la aprobación de los demás parlamentarios se reúnen antecedentes, como muchos de los que se están exponiendo aquí y otros que faltan. En caso afirmativo se constituye la comisión investigadora. En ese marco se les ha invitado a concurrir a esta sesión, para ayudar a desvirtuar o a confirmar las dudas de esta comisión.

Les pido en primer lugar que respondan las preguntas que se han formulado, para luego continuar con la sesión. Si estima que alguno de sus colaboradores puede complementar la respuesta, puede hacerlo.

Señor director, tiene la palabra.

El señor **PIZARRO**.- Señor Presidente, recojo las palabras del diputado Tuma para reafirmar que el tema que

estamos tratando es complejo y no se reduce solamente a las tierras. Desde su creación, la Conadi cuenta con tres fondos: el fondo de tierras y aguas, donde, además de la tierra, el agua es muy importante, por todo lo que sabemos, para que esa tierra pueda producir; el fondo de desarrollo, que genera condiciones para que esos territorios sean productivos y las familias puedan vivir de la tierra; y el fondo de cultura y educación, que también está muy interrelacionado. Siempre decimos que el territorio es parte de la cultura indígena y, por lo mismo, es un componente cultural importante.

Fue muy bueno su comentario, diputado Tuma. Conoce la realidad de la región y sabe efectivamente cuál fue uno de los grandes errores que se cometieron históricamente. Por mi parte, declaro que la institución en general debe hacer un *mea culpa*.

Como usted bien dice, diputado Hasbún, como director nacional de la Conadi debo hacerme cargo de la institución, independientemente de que haya asumido en 2014. Muchas situaciones vienen desde los orígenes de la institución. Pero es muy cierto lo que dice el diputado Tuma: hay una tremenda deuda de la institución respecto del proceso de restitución y lo que va después de la restitución.

Se ha dicho que muchos territorios no están siendo ocupados productivamente por las comunidades. Efectivamente, hay casos como ese, pero debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿Qué estamos haciendo para que familias de escasos recursos, como es el caso de la mayor parte de ellas, se puedan instalar en los territorios y vivir dignamente? ¿Les podemos pedir a familias indígenas que se trasladen a territorios que en muchos casos no cuentan con caminos para acceder, servicios básicos de electricidad, agua potable ni agua para riego? Existen casos de muchos terrenos restituidos hace años que no cuentan con una gota de agua, que se encuentran en territorios donde no hay agua ni siquiera para consumo, menos para regar.

Existen muchos factores que inciden en que efectivamente haya una "pata coja" en la política de tierras, que tiene que ver con la forma de generar condiciones para que las familias vivan dignamente en

esos territorios. Ese es un tremendo tema, el diputado lo sabe, así como también que los esfuerzos que hemos realizado, desde que asumiera en abril de 2014, van en esa dirección. La mejor prueba de aquello es que en la Ley de Presupuestos de 2016 -si bien no se incrementó notablemente respecto del anterior- se incrementó el programa de Apoyo a Predios Adquiridos y también, casi al doble, los fondos destinados para aguas de riego.

Sabemos que, en 2014 y 2015, avanzamos notablemente en la restitución territorial gracias al aumento presupuestario, pero no podemos seguir en una lógica, en una dinámica, de restituir sin generar esas otras condiciones, porque, en muchos casos, genera la desazón de las comunidades y de las familias con justa razón, pues se les restituye, pero sin las condiciones para trasladarse y vivir dignamente en el sector. Ese es un punto muy importante.

En ese sentido, quiero destacar que además del incremento presupuestario que tuvimos también estamos trabajando con los gobiernos regionales, a quienes hago un reconocimiento, porque nos apoyan económicamente de distintas formas para generar condiciones y para que los terrenos sean realmente productivos. Estamos consientes de que esos territorios, en muchos casos, son de alta productividad, es algo que aprovecho de destacar de esta administración, pero hemos hecho énfasis en que si vamos a restituir territorios sea con los siguientes criterios:

Primero, que sea en los lugares de origen de las comunidades para que se cumpla el espíritu del artículo 20 letra b) -hablamos de pérdida territorial-. Por lo tanto, la restitución debe ser, en lo posible, en el espacio de origen de la comunidad. Si no es probable por razones físicas, naturales o porque ya no existe el territorio, las comunidades se pueden trasladar, pero eso también tiene efectos notables en los distintos municipios de la región y existen muchos ejemplos al respecto. Está presente el diputado Venegas, de la Provincia de Malleco, quien conoce al diputado Chahin quien, a su vez, nos conoce muy bien y ambos saben que hay comunas como Victoria, donde se ha visto un aumento explosivo de las comunidades mapuches la llegada de comunidades de otros lugares.

Entonces, hay que hacerse cargo de esos factores, por eso es muy importante lo que señala el diputado Tuma. Es decir, no podemos hablar solo del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, y desligarnos del resto de las instituciones del Estado.

¿Qué pasa cuando hay un aumento explosivo de comunidades mapuches en una comuna? Ese alcalde debe ver cómo satisface la demanda de educación, salud, caminos y agua, que, en muchos casos, funcionan solo con camiones aljibe por la falta de recursos hídricos, lo que genera un tremendo problema para los alcaldes quienes no pueden resolver esas demandas porque no cuentan con los recursos. Repito, es muy importante la coordinación intersectorial. El tema no se puede ver solo por la Conadi o por el ministerio, se deben hacer cargo los gobiernos regionales y toda la institucionalidad.

En ese sentido, hemos avanzado bastante en la coordinación entre los distintos gobiernos regionales. Por ejemplo, en la Región del Biobío se han firmado importantes acuerdos con el intendente y en las distintas ADI (Áreas de Desarrollo Indígena), como la de Lleulleu y en la del Alto Biobío, para focalizar los recursos de la institucionalidad justamente en las comunidades. ¿Cómo hacemos eso? Con acuerdos con las comunidades. Eso es algo muy importante.

La siguiente pregunta dice, ¿cómo se maneja el criterio para avanzar en la restitución territorial? Claramente, desde abril de 2014, existe un criterio de privilegiar aquellos procesos que llevaban más tiempo abiertos, las llamadas comunidades 115 y 308, pero también las demandas nuevas. Esa materia la hemos abordado paso a paso, considerando también que hay factores externos que muchas veces nos impiden avanzar con comunidades que son más antiguas. Por ejemplo, en la carpeta 115 -debo decirlo-, hay cinco comunidades que no tuvieron movimiento alguno en sus casos y, por lo tanto, estarán archivadas hasta que eso suceda, porque no podemos forzar a las comunidades que iniciaron un proceso de documentos que quedó estancado que sigan avanzando. En ese caso, avanzamos de acuerdo al orden y al trabajo que desarrollamos con las distintas mesas de trabajo, por ejemplo, en las demandas de la mesa de las 50 comunidades

-que ahora son 8- se ha avanzado notablemente. Es decir, 42 comunidades tienen distintos niveles de avance y quedan 8 pendientes por diversos factores externos que explicaré a continuación.

Por ejemplo, nos pasa habitualmente -es muy natural- que reúna facultades como director para obligar a alguien a que venda su terreno y pueda hacer restitución territorial. En esos casos operan las leyes del mercado y también la voluntad del propietario a acceder y vender ese territorio. Eso, en muchos casos, hace que procesos que son antiguos no se puedan cerrar, pues con el predio que está demandado por la comunidad no se puede llegar a acuerdo por distintos factores legales o con el precio. Eso ha hecho que muchos procesos antiguos queden sin resolver, lo que implica que la comunidad empieza una búsqueda en otro predio para ver si se puede resolver la restitución territorial de su caso particular.

A propósito de que el diputado Hasbún mencionó el tema de la comunidad de Los Lolocos, quiero señalar lo siguiente. Indudablemente, cuando uno asume un ministerio -por eso hay que hacer el ejercicio y es bueno que lo señale; de hecho, concuerdo completamente con usted- debe hacerse cargo de la institución, independiente, de la fecha -en este caso 2014- no puede obviar lo ocurrido, pero además debe reconocer el trabajo previo. En particular, en el caso de la comunidad de Los Lolocos, buena parte de las compras que se realizaron en 2014 eran compromisos del gobierno anterior. Es decir, eran carpetas que ya estaban en proceso, por lo mismo, no los podía cerrar, pues eran procesos que había que respetar y continuar porque se habían iniciado años antes. Por lo tanto, lo que hice fue una revisión exhaustiva de todas las carpetas, eran bastantes, muchas de ellas eran parcelaciones de 10 o 15 hectáreas, pero había que hacer una carpeta para cada una de ellas y eran muchas compras. Entonces, lo que hicimos fue tomar la información y continuar con ese proceso. Lo mismo le tocará, seguramente, al director que me suceda, tomará los procesos que están en marcha y continuará con los que vayan surgiendo durante el período que le corresponda. Ese es el caso particular de la comunidad de Los Lolocos.

El señor **MEZA** (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.

El señor **VENEGAS**.- Señor Presidente, por su intermedio, es muy importante que nos señale la cantidad de hectáreas que se compraron y el nombre de los beneficiarios, porque el subsidio, de acuerdo a los datos que tenemos, alcanzaría a 174 millones por familia.

El señor **MEZA** (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Gustavo Hasbún.

El señor **HASBÚN**.- Señor Presidente, la información señala que 22 familias recibieron 174 millones. Obviamente, es un monto muy alto y es importante saber, ¿por qué recibieron esa cantidad, las condiciones y el criterio que se utilizó? Es importante que nos responda como institución, porque, obviamente, es una duda legítima.

El señor **PIZARRO**.- Señor Presidente, lo que hacemos habitualmente como Conadi es la restitución territorial de una cantidad aproximada de 10 hectáreas por familia. El valor de esas hectáreas es muy relativo, los que conocen el sector saben que hay zonas donde la hectárea vale 3 millones y otras donde vale 8 millones, dependiendo de las aptitudes productivas, si tiene agua de riego, etcétera.

Entonces, la cantidad de recursos que recibe cada una de las familias está en función del territorio que está siendo demandado. Puedo hacer llegar a la comisión el estado detallado de aquellas compras, de hecho, está en la página web de la institución -allí lo puede ver claramente- porque nos ceñimos a ese criterio. ¿De dónde surge ese criterio? De estudios que se han hecho con el Centro de Ciencias Ambientales EULA (End User License Agreement) de la Universidad de Concepción que así lo indican. Ahora bien, soy ingeniero agrónomo y sé que con 10 hectáreas tampoco se puede pretender ser millonario, solo se puede sobrevivir en un territorio así siempre y cuando tenga todas las condiciones. En muchos casos se han hecho restituciones territoriales con predios que son de muy mala calidad, por eso hemos puestos el énfasis en que si vamos a hacer restituciones sean con predios de buena calidad para que efectivamente las familias produzcan en sus terrenos.

El señor **VENEGAS**.- Eso sigue siendo responsabilidad de la Conadi. Significa que hay una política pública que se está aplicando con un descriterio absoluto.

El señor **PIZARRO**.- Concuero absolutamente con usted diputado Venegas, hubo casos de restituciones territoriales de predios que son eminentemente forestales.

Claramente, todos sabemos que un predio forestal tiene un ciclo productivo de 15 a 20 años. ¿Qué hace la familia en esos años? En general, los procesos que hemos llevado a cabo desde abril de 2014 a la fecha son agrícolas y de alta productividad -eso lo pueden corroborar. En algún momento se ha criticado, pero el tiempo nos dio la razón-. ¿Qué implica eso? Que a las familias les permitiría producir y vivir en esos territorios; es decir, producir cultivos anuales y tener ingresos anuales. Eso es un tremendo cambio en la política.

El señor **MEZA** (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Gustavo Hasbún.

El señor **HASBÚN**.- Señor Presidente, quiero insistir con la pregunta y sobre el tema de la comunidad. Hablamos de un promedio de diez hectáreas por familia. Sabemos que los valores están entre los tres y los ocho millones de pesos. Si fuera el valor máximo, estaríamos hablando de ochenta millones de pesos, sin embargo, cada familia habría recibido 174 millones de pesos. Eso es lo que a nosotros nos complica y es lo que nos gustaría poder saber y contar con esa información. Si bien esto está publicado, nos complica porque no se explica por qué una familia recibe 174 millones de pesos, cuando el valor de mercado no supera los ocho millones de pesos de valor máximo por hectárea. Es esto lo que me interesa que se aclare.

El señor **MEZA** (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Alberto Pizarro.

El señor **PIZARRO**.- Señor Presidente, hay que tener cuidado con lo siguiente. Nosotros trabajamos en función del número de familias que está en el registro de comunidades de la Conadi, por lo que los cálculos y el trabajo se realizan en función de esa información. Por lo tanto, es bastante difícil que se llegue a esa cifra, por familia, considerando que estamos hablando de diez

hectáreas, con casos variables que van de ocho a doce hectáreas. Sin embargo, reitero que llegar a la cifra mencionada es bastante difícil. De hecho, en los predios de más alta productividad que hemos entregado, los valores por familia rondan en torno a los 80 millones. Sin embargo, les puedo hacer llegar los datos precisos del caso en particular, porque probablemente hay un error en el número de familias versus el número total entregado. Haremos una revisión del caso. En caso de haber un error, se corregirá y se les enviará la información respectiva.

A continuación, seguiré respondiendo sus consultas. Luego de explicar el proceso, en general, de cómo funciona el proceso de priorización, es decir, el proceso de enfatizar algo, independientemente de la glosa que fue aprobada en noviembre pasado, el objetivo siempre ha sido respetar la institucionalidad.

En este sentido, concuerdo completamente con el diputado Joaquín Tuma. Esto es algo que hemos dicho en todos los lugares y lo seguiremos afirmando: acá se debe respetar la institucionalidad.

Es por eso que hemos sido tan rigurosos en el tema de los procedimientos. Asimismo, agradecemos a la Contraloría General de la República, porque desde mayo del año pasado revisa todas las carpetas y toma razón de cada una de ellas. En la historia de la Conadi, esto no había ocurrido, pero desde mayo del año pasado, el ente contralor revisa cada una de las carpetas para luego darnos la toma de razón para así nosotros continuar con el proceso. Esto nos da garantía de que lo que estamos haciendo se ajusta a derecho y cumple con todas las garantías para decir que se están utilizando bien los recursos de todos los chilenos, los cuales van a llegar a las comunidades a las cuales tienen que llegar.

Respecto de la situación del señor Catrilaf, sobre las compras realizadas entre el 2009 y el 2011, claramente no estaba en la institución esos años, sin embargo, debo asumir la responsabilidad de todo lo que ha ocurrido anteriormente. De hecho, nos ha correspondido resolver situaciones que se han ido generando por la misma institucionalidad y, en razón de ello, tango claro que es mi responsabilidad el funcionamiento de la institución,

así como asumir los errores que se han cometido en el pasado.

En el caso particular del señor Catrilaf, debo dar fe que en su momento cumplió con todos los requisitos para poder llevar a cabo este proceso en el período 2009 a 2011. Sin embargo, en este caso es bastante difícil, considerando los hechos ocurridos en 2016, que se pudiera suponer que esta persona incurriría en algún acto ilícito en el futuro. Conozco a mucha gente; me reúno con miles de personas, y quien habla y los otros subdirectores, todas las semanas tenemos audiencias con muchos dirigentes. Se debe considerar que solo en la Araucanía las comunidades suman 2.124. Si eso se multiplica por tres o cinco dirigentes por comunidad, son miles las personas con las que uno constantemente está en interacción como director o subdirector de la Conadi.

En relación a la relación con la machi Francisca Linconao, me parece grave que se pueda asimilar la conducta de una persona, y que eso tenga repercusión en toda una comunidad.

Al respecto, he sido bastante claro en señalar que las aplicabilidades y los procesos de restitución se hacen a comunidades, y no a personas. Por lo tanto, encuentro que sería bastante injusto y discriminatorio castigar a una comunidad por lo que una persona, que está formalizada y no condenada, realice en su fuero personal.

Respecto de los lamentables hechos relacionados con el funcionario Gabriel Sandoval, efectivamente se tomaron todas las medidas. De hecho esta situación fue conversada con la asociación de funcionarios en su momento. Comprendemos lo grave de la situación porque también fue terrible para nosotros como institución. Actualmente, el señor Sandoval todavía tiene recursos adicionales que la institución le otorga para que en su momento pueda arrendar una casa y pueda seguir una vida normal luego de pasar por una situación como la vivida. Por lo tanto, estamos dando todas las condiciones para que este funcionario pueda seguir desarrollando su vida.

El señor **HASBÚN**.- Señor Presidente, nombré a este funcionario como ejemplo. Sin embargo y en general, me interesa saber qué políticas se toman respecto de las

amenazas de muerte o de otro tipo a funcionarios que están cumpliendo con sus funciones y trabajan en terreno.

Sé que es el caso más emblemático, sin embargo, me interesa sobremanera saber qué políticas adoptan ustedes como institución en situaciones como estas.

El señor **PIZARRO**.- Señor Presidente, afortunadamente eso no es lo común y corresponde a un hecho aislado. Sin embargo, tenemos una excelente coordinación con la gobernación. Por lo tanto, cada vez que un funcionario sale a terreno se avisa a esta institución para que esta sepa que la persona está en tal o cual zona en función de su trabajo.

En esa línea, si cada institución tiene funcionarios que van a terreno, ¿es acaso necesario que se tenga que poner resguardo policial para cada uno de ellos?

El señor **MEZA** (Presidente accidental).- No es con todas las instituciones que funcionan en la Araucanía.

El señor **PIZARRO**.- Señor Presidente, por cierto que no en toda la Araucanía, sin embargo, hay muchas instituciones que trabajan en la zona.

El mejor ejemplo es Indap, con su programa PDTI, que desarrolla un amplio trabajo en el área indígena con una cobertura bastante amplia.

El señor **HASBÚN**.- Señor Presidente, el Indap tiene una labor distinta a la de la Conadi, cuya función es claramente más riesgosa.

El señor **PIZARRO**.- Señor Presidente, está bien. Lo quiero decir es que nosotros nos coordinamos con la gobernación cada vez que un funcionario sale a terreno, y se hace una bitácora para establecer claramente la labor y zona en la cual se desarrolla la labor planificada.

El señor **HASBÚN**.- Señor Presidente, quiero insistir en lo mismo. Este tipo de situaciones ocurren constantemente, y no solo está el caso del señor Sandoval, sino también las amenazas escritas en los panfletos que se encontraron en el atentado incendiario a la lechería de la familia Luchsinger Mackay, en los cuales se expresaba que se quería atentarse contra la vida del exsubdirector y de otra funcionaria.

Por lo tanto, me interesa saber -lo reitero- cuáles son las medidas que adoptan en relación a este tipo de situaciones que tienen que ver con la protección de los

funcionarios. No quiero individualizar esto en una persona, sino saber cuáles son las medidas que la institución adoptará cuando se repitan situaciones como esta.

El señor **PIZARRO**.- Señor Presidente, claramente los temas de seguridad no dependen de nosotros, sin embargo, reitero que nos coordinamos con las instituciones que están a cargo de ella.

El señor **MEZA** (Presidente accidental).- Anteriormente, tuvimos una sesión secreta en la que participaron los representantes de los organismos de seguridad de nuestro país, por lo que muchas de nuestras inquietudes han surgido de esa reunión.

Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.

El señor **VENEGAS**.- Señor Presidente, para contextualizar esta conversación, esta Comisión Investigadora se conformó con el objeto de mirar la actuación de los organismos públicos, especialmente, de la Región de la Araucanía, y su incidencia en los hechos de violencia en la mencionada región.

Entre las instituciones involucradas están Carabineros, la PDI, los tribunales de justicia, la ANI y, entre otros, indudablemente está la Conadi. Sin embargo, es mi opinión que la Conadi, más que ser parte de la solución, es parte del problema.

Por otro lado, al director de dicha institución lamentablemente le afecta una cosa que los teóricos denominan el efecto sombra. Efectivamente, usted llegó en abril de 2014, por lo que se tuvo que hacer cargo de una larga historia negativa de la Conadi, en la cual, entre otros procesos, ha habido cooptación política, producto de la intervención de distintos partidos en distintos momentos, a través de parlamentarios que van y presionan para que se beneficie a determinadas comunidades. Lo digo con la tranquilidad que me da el hecho de que nunca he ejercido esa presión a este director ni a los anteriores. Distinto es enviar un oficio para solicitar una audiencia para una comunidad o un dirigente, porque otra cosa es presionar para que se adquieran terrenos para una determinada comunidad que me conviene electoralmente. Eso se ha dado demasiado.

Segundo, quiéranlo o no, la Conadi ha dado malas señales, porque lo que se ha instalado es que hay que usar violencia para acelerar los procesos. Están los ejemplos que dio el diputado Meza, respecto de los cuales hay que preguntar oficialmente, para que nos den todos los antecedentes y descartarlos o desmentirlos.

Me parece que sería extraño que pasaran por sobre la norma, porque a una comunidad que no tiene aplicabilidad, simplemente, no se le puede comprar. Ni en un proceso muy rápido ni muy lento, simplemente, no se le puede comprar. ¡Ahí hay otro elemento!

Por lo tanto, ¿cuándo efectivamente se cumple con las normativas y las instrucciones? Incluso, han existido normas del nivel nacional que establecían procedimientos. Antes existían los sobrepuestos, que eran ambiguos, y después se estableció que el precio no podía superar el 10 por ciento de la tasación comercial. Ahí había problemas, porque involucrados directos hacían tasaciones y ponían sobrepuestos para hacer negocio. Incluso, se planteó la idea de que había funcionarios involucrados, que están en la justicia, que recibían coimas y terceros intermediadores, que son los famosos corredores.

Personalmente, conozco gente -no me lo contaron- que actuó de esa forma y que era tan torpe que hacía aspavientos de lo que ganaba. Se producía una triangulación entre el dueño de la comunidad que quería vender bien, las comunidades que metían organizadamente y este otro señor que hablaba con gente en la Conadi.

Ahora, hay un problema muy cierto respecto del cual quiero hacer una consulta muy concreta y, dependiendo de lo que me respondan, haré otras preguntas. ¿Cuánto en promedio es el subsidio del artículo 20 letra a)?

El señor **PIZARRO**.- 25.000.000.

El señor **VENEGAS**.- Precisamente, eso nos permite establecer que el hecho de que a cada familia de una comunidad se le pueda dar un subsidio de, por ejemplo, 170 o 180 es una pésima política, una pésima práctica. ¿Por qué? Porque las demás comunidades dicen: "No pueden haber diferencias". Porque estamos hablando de una política del Estado y no de una cuestión que queda al arbitrio de una autoridad particular.

Ese problema también nos pasó con el Indap, en que una comunidad presionó y le dieron el doble de la cantidad habitual. ¿Qué hicieron las otras? Obviamente, pidieron lo mismo. Entonces, por eso es importante que no se produzca este tipo de hechos, porque se usan precisamente para desacreditar una institucionalidad y una política que creíamos que era necesaria, como la restitución de tierras, pero en forma bien hecha.

Además, se suponía -me refiero al espíritu de la ley- que este instrumento iba a servir para alejarnos de la violencia, de la práctica del uso de la fuerza. Para eso restituimos: para hacer justicia y evitar la violencia, pero tenemos todo lo contrario, porque acaban de mencionar que hay una comunidad que en 2009 o 2011 le compraron tierras y resulta que pasado el tiempo - obviamente, no lo pueden prevenir- sigue usando la violencia. Se le ha comprado sobre mil hectáreas.

Por lo tanto, la pregunta que nos parece importante es qué medida ha tomado el director de la Conadi durante su desempeño en el cargo para corregir las falencias que he mencionado.

Por otro lado, le quiero decir al director que debemos unificar el discurso, porque cuando en su exposición histórica parte diciendo que a finales del siglo XIX eran 5.000.000 de hectáreas, está poniendo el umbral de lo que hay que pedir como restitución, y ello está muy alejado de la realidad, porque si este Estado lo vendemos entero, nos demoramos los próximos 50 años para poder hacer eso. Entonces, el director está dando una señal equívoca, porque lo real es que había conflicto de tierras en el orden de 164.000 hectáreas perdidas por reducción y 64.000 hectáreas con título de merced y otras 100.000. Eso es importante.

El director dijo que entre 1994 y 2009 hemos comprado 91.000 hectáreas, lo que me parece que es un número bajo, considerando toda la plata que hemos invertido. He escuchado decir a otras autoridades de la Conadi que habíamos llegado a 300.000 o 400.000 hectáreas.

El señor **PIZARRO**.- Con Bienes Nacionales.

El señor **VENEGAS**.- Pero, eso hay que decirlo. Es distinta la cosa. Entonces, hay que agregar que hemos llegado como a 600.000 o 700.000 hectáreas, porque el

Estado de Chile ha entregado miles de hectáreas, como en Quinquén y en el norte, porque eso acerca las cifras. Si digo que hemos restituido solo 91.000, estaríamos muy lejos de la meta, sobre todo cuando, el director ha puesto como horizonte 5.000.000 de hectáreas. Así vamos construyendo la realidad.

El director dice que 10.000 hectáreas son ahí no más, pero Chile está en capacidad de restituir y a eso se comprometió. Nadie dijo que tenían que ser 10.000 hectáreas de riego de categoría número uno, aunque estoy de acuerdo en que fue un error comprar mala tierra.

En consecuencia, hay medidas concretas. Sin embargo, cuando la gente de la Conadi termina dando una señal equívoca, estamos lejos de ir aminorando los efectos de la restitución de tierras, que es justa, pero debe tener un límite. ¿Cuál es el límite? La política pública debe tenerlo claro, porque, en caso contrario, generamos expectativas hasta el infinito, y eso es parte del problema.

¿Qué han hecho para evitar que las comunidades se reproduzcan por mitosis? Porque andan trayendo gente que nunca ha tenido apego a la tierra, que vive, por ejemplo, en la Región Metropolitana o en Concepción; hacen una comunidad que instalan y más encima reclaman territorio de comunidades tradicionales, como es el caso de una comunidad en la zona de Tolpán, en Renaico. Gente que nunca vivió en el sector, con medidas de fuerza, expulsó a los históricos habitantes del sector que conocemos de siempre, se instaló y la Conadi lo permitió.

Le hice la consulta al director y me dijo que está todo perfecto en el marco de la ley, pero qué ocurre si el tipo es un sinvergüenza que utiliza la fuerza contra los que son pacíficos. ¿No vamos a hacer nada? ¿Acaso la Conadi no tiene una unidad de conflicto? Me parece que es importante que el director nos aclare todos esos temas, para saber qué se está haciendo y qué se va a hacer al respecto.

El señor **MEZA** (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Hasbún.

El señor **HASBÚN**.- Señor Presidente, hice una pregunta al director de la Conadi en relación con la comunidad Trapilhue, respecto de si había habido una compra exprés

y no respondió, porque efectivamente hubo una compra de exprés.

Por otro lado, cuando hablamos de la comunidad Juan Catrilaf entre 2009 y 2011, señalé que se habían comprado 750 hectáreas en 2015, lo cual sí corresponde al período del director. Entonces, ¿bajo qué parámetro se compraron 750 hectáreas, por más 4.500 millones de pesos? ¿El director tuvo relación con el presidente de la comunidad antes de ser director? ¿Estuvo en reuniones con esa persona antes de la compra de esas hectáreas? ¿Qué vinculo ha tenido con esa persona? Es importante que el director responda esas preguntas y también lo relacionado con el señor Heller.

El señor **MEZA** (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora Claudia Nogueira.

La señora **NOGUEIRA** (doña Claudia).- Señor Presidente, quiero llevar al director de la Conadi al terreno político. En primer lugar, me gustaría saber a qué se debieron las falencias respecto de la tardanza en los resultados y la falta de información en la votación para representantes indígenas al Consejo de la Conadi. Trascendió por los medios de prensa y lo constatamos en las propias comunidades la queja porque los lugares para votar estaban muy lejos de las comunidades, hubo traslado de votos de un lugar a otro, las urnas eran de cartón, hubo incluso comuneros como Curinao que alegó fraude en la elección al Consejo de la Conadi. El primer cómputo de la votación se dio a conocer 27 horas después del cierre de las mesas. Llama la atención que votando en 2012 más de 31 mil personas, en la última votación solo fueron 25 mil personas. Esa disminución obedece a algo. Cuando hablamos de dar el lugar que se merecen las comunidades de nuestros pueblos originarios y luego tener ese trato tan disminuido y tan poco acorde, me parece extraño el manejo que ha hecho la Conadi con respecto a esto.

En segundo lugar, por su intermedio señor Presidente, al director de la Conadi, ¿por qué como funcionario público apoyó un acto ilegal que no permitió usar las dependencias del organismo público? Durante 2015, la sede de la Conadi fue tomada por cuatro comunidades mapuches que protestaban contra el intendente Francisco Huenchumilla porque decían que no quería recibirlos. El

director de la Conadi se une a las comunidades diciendo que tampoco el intendente Huenchumilla lo quiere recibir, resultando raro porque el gobierno actúa coordinadamente. Quitarle el piso al intendente en un conflicto tan complejo como este, en vez de ser una ayuda, le echa fuego al problema. En la prensa trascendió que se tomaron la sede de la Conadi y el director los apoyó.

Las disputas del director de la Conadi con el intendente Huenchumilla fueron públicas y empezaron mucho antes. En 2014, el señor Huenchumilla dijo que la Conadi estaba agotada y -como recordó el diputado señor Mario Venegas- cooptada políticamente. Me parece grave porque no contribuye a arreglar el conflicto. No contribuye esa falta de coordinación tan profunda entre autoridades de gobierno por un lado que quieren arreglar el conflicto y por otro lado profundizándolo el director de la Conadi apoyando a las comunidades mapuches y quitándole el piso al intendente.

El diagnóstico está hecho. La restitución de tierras claramente no ha dado el resultado de disminuir la violencia, sino que esta se ha acrecentado. Por tanto, la restitución de tierras no es suficiente, tal como señaló el diputado señor Venegas, por su intermedio señor Presidente. ¡Es tanto lo que el tema se ha manoseado! Partiendo que hay reivindicaciones legítimas. Es tanto lo que se ha manoseado y abusado que hay personas mapuches de Santiago que son trasladadas para pedir terreno.

¿A qué se refiere el director de la Conadi con medidas concretas? Este es un problema que se viene arrastrando desde tiempos inmemoriales. ¿Qué medidas hay para entregar tierras y ayudar a la productividad de esas tierras?

¿Quién es el interlocutor de la Conadi? ¿Cuál es la contraparte? ¿Está organizada? ¿Me entiendo con tal comunidad que es la que lleva la voz de las otras comunidades? ¿O es un arreglo uno a uno? Noto que tenemos al Estado por una parte y por la otra no hay nadie con quien parlamentar, con quien tener un diálogo y llegar a un acuerdo y que tenga tal legitimidad para que puedan las otras comunidades sumarse y aceptar lo acordado por algún ente. ¿Qué ente? ¿Si el director lo visualiza o no?

En último lugar, además de la restitución de tierras ¿qué medida fundamental puede contribuir a la pacificación y término de este conflicto?

El señor **MEZA** (Presidente accidental).- El cuarto punto de mandato que tiene esta comisión dice: "Influencia y relación de la política de compra de tierras con los niveles de violencia rural en la zona y, conveniencia de reformular estas. Actuaciones de la Conadi y su responsabilidad eventual en los actuales niveles de violencia".

Tiene la palabra el diputado señor Venegas.

El señor **VENEGAS**.- Señor Presidente, como es evidente que el señor director no va a alcanzar a responder todas las preguntas y como falta por intervenir otros colegas, sugiero que se vuelva a citar al director de la Conadi, para no estar apurados con el tiempo.

El señor **MEZA** (Presidente accidental).- ¿Habría acuerdo para citar nuevamente al director de la Conadi para el próximo jueves a las 9.00 horas?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado señor Chahin.

El señor **CHAHIN**.- Señor Presidente, voy a guardar mi intervención y mis preguntas para la próxima sesión, porque mi idea es que alcance a responderlas.

El señor **URRUTIA** (don Ignacio).- Entonces deje que los otros...

El señor **MEZA** (Presidente accidental).- Llamo al orden al diputado señor Urrutia.

El señor **CHAHIN**.- Señor Presidente, solicito que el director de la Conadi traiga la próxima sesión un informe por cada carpeta, del artículo 20, letra b) donde se establezca la fecha de presentación del requerimiento, la fecha de cada una de las actuaciones y resoluciones hasta la compra del predio. También que traiga información con indicación del número de comunidades que tienen aplicabilidad del mismo título. Todas estas comunidades tienen efectivamente aplicabilidad. También el número de familias que están en la resolución de aplicabilidad y la superficie de hectáreas compradas, indicando si es única o primera compra, si hay compromisos de compras sucesivas o no, por parte de la Conadi. En definitiva, fechas, resoluciones, estado de avance, al menos, de aquellas

comunidades que tienen pendiente compra en ese periodo. Todas las que se compraron en su periodo y las que faltan por comprar. Las que ya se compraron en periodos anteriores, en realidad, no es tan significativo, pero sí de las que se han comprado en el periodo del director y las que están en proceso. Quiero esa información en detalle porque sería bueno ver cuál ha sido el avance de cada una de las comunidades, las resoluciones y tener un mapa más detallado. Si entramos a la casuística... En conjunto podemos tener elementos que podrían ser cuestionables, pero nos permite ver cómo se ha resuelto.

El señor **MEZA** (Presidente accidental).- Quedan diez minutos de sesión, pero como usted va responder en esta o en la siguiente sesión, tiene la palabra el diputado señor Rathgeb.

El señor **RATHGEB**.- Por su intermedio señor Presidente, quisiera que el invitado en su calidad de director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena me responda a una pregunta relacionada con algo que mencionó el diputado señor Mario Venegas sobre la división de comunidades. Hay una comunidad origen y luego está la dos, tres, cuatro, cinco, la oriente, la sur, la poniente, la de arriba y la de abajo. Finalmente, no se sabe qué pasa con ese tema. ¿Cuál es la razón para aceptar ese tipo de cosas? Van naciendo hijos, nietos y surgen comunidades de forma infinita ¿Hasta cuándo va a existir? Finalmente, quién se va a quedar a cargo de ese territorio cuando fallezcan los abuelos, porque los hijos ya tienen otra comunidad y adquirieron los terrenos. Por lo tanto, si los adjudicatarios originales fallecieron y los otros ya tienen territorios, entonces, ¿esas tierras vuelven al Estado? ¿A quién pasan, definitivamente? Porque esa comunidad desaparecerá y nadie de los primeros adjudicatarios no va a estar vivo, pues los hijos y los nietos ya armaron una comunidad 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué pasará con eso? Entiendo que una comunidad no la forman solo los vivos, sino también los antepasados y aquellos que nacerán a futuro. Entonces, no hay razón para armar 2, 3, 4 o 5 comunidades iguales a la de origen, porque perdemos la lógica del racionamiento para la restitución de terrenos.

Respecto de la situación de terrenos con plantaciones, lamentablemente, uno de los intereses para pedir determinados terrenos es la superficie de vuelo, lo que generalmente genera una serie de dificultades, por lo tanto, quiero saber si existe algún criterio en relación con esa situación.

Asimismo, quiero saber si usted como director y teniendo claridad respecto de lo que se vive en la Región de La Araucanía y como director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, ¿qué haría usted, de aquí en adelante, para buscar la tranquilidad en nuestra región? ¿O, sencillamente, usted no tiene la solución como muchos de nosotros?

El señor **MEZA** (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia.

El señor **URRUTIA** (don Ignacio).- Señor Presidente, me llamó la atención que el director de la Conadi dijera que ellos tenían que continuar lo que se hizo, precisamente, en el gobierno anterior, porque en este Congreso estábamos llenos de proyectos presentados durante la administración anterior, pero el gobierno actual los retiró casi todos. Había varios programas que venían desde el gobierno anterior, pero este gobierno los anuló y los hizo desaparecer. Me imagino que cuando uno continúa con algo es porque está bien hecho, sino no continúa. No me quedó claro. Se continuó con eso, porque estaba bien hecho. De lo contrario, me imagino que lo habría eliminado; eso habría sido lo lógico, porque como este gobierno creyó que todo lo anterior estaba malo, sacaron los proyectos, eliminaron los programas e hicieron una pila de cosas para que no figurara el otro gobierno llevándose las flores. ¿Estaban bien hechos esos programas? ¿Por qué usted continuó con ellos?

La prohibición de compras de tierra está fijada en la Ley de Presupuestos, la cual dura un año y después cambia. Tengo entendido que ayer o antes de ayer, ingresó un proyecto de ley o una moción parlamentaria de Renovación Nacional para pedir que esto fuera en forma permanente, no solo por un año, como está fijado actualmente. Como está fijado por un año, es casi lo mismo que nada porque, en el fondo, prohíbe durante un año, pero eso no quiere decir que lo vaya a prohibir el

año que viene. Me imagino que las comunidades que se dedican a tomarse tierras, lo tienen claro como el agua. Da lo mismo si se las toman este año o no, porque se las pueden comprar el próximo año. ¿Ha aumentado la toma de tierras, por el hecho de decir que no se pueden comprar por este año, pero si a partir del próximo año? ¿Ha cambiado en algo el sistema y la presión por compra de tierras a través de tomas, o continúa exactamente igual?

Asimismo, quiero conocer la cantidad de tierras utilizadas y no utilizadas compradas por la Conadi o entregada por bienes nacionales. Se habló de 90.000 hectáreas compradas por la Conadi. ¿Cuántos de esos campos están siendo utilizados Y cuántos no? ¿Cuántos están abandonados? ¿En cuántos de los que están ocupados, están realmente trabajando la tierra? Puede estar ocupado, pero la tierra puede estar abandonada. Quiero esa información, porque tengo entendido que lo que trató de hacer el gobierno anterior, sin resultados positivos, fue meter maquinaria para que la gente trabajara las tierras, pero, hasta donde sé, tampoco las trabajaron. ¿Dónde quedó toda esa maquinas? ¿Se está utilizando o está abandonada? ¿Qué pasó con esa implementación?

El señor **MEZA** (Presidente accidental).- Señor director, ¿está de acuerdo en responder en la próxima sesión?

La señora **NOGUEIRA** (doña Claudia).- Señor Presidente, ¿es posible que el oficio que pidió el diputado Chahin esté para la próxima sesión?

El señor **MEZA** (Presidente accidental).- Sí, señora diputada.

Tiene la palabra el diputado Joaquín Tuma.

El señor **TUMA**.- Señor Presidente, se dice que, en muchos casos, se estaría completando el número de familias con gente de Santiago, lo que engrosa la lista de las comunidades.

El señor **VENEGAS**.- Esa es una práctica habitual desde hace años.

El señor **TUMA**.- Por eso quiero que el director me diga si se puede poner un filtro o un criterio para evitar que eso siga ocurriendo. Evidentemente, si alguien se fue hace cincuenta años de La Araucanía y tiene la posibilidad de que le den tierras que, eventualmente, va a dejar abandonadas o que va a arrendar por otros

cincuenta años, creo que hay que darle prioridad a quienes lo necesitan y a quienes viven ahí. No sé si hay un criterio al respecto.

La señora **NOGUEIRA** (doña Claudia).- Señor Presidente, quizás, incluirlos, sea la mirada de la Conadi. Quiero que se sincere el tema. Puede ser que la Conadi fomente, permita o condicione que otros comuneros o personas de otras regiones puedan integrarse. Entonces, solicito que el director responda el planteamiento de los diputados representantes de La Araucanía.

El señor **MEZA** (Presidente accidental).- Todos los parlamentarios tenemos dudas respecto de hasta dónde la Conadi puede ayudar a disminuir el clima de violencia en La Araucanía y hasta dónde ha sido responsable. La Conadi como institución, no solo Alberto Pizarro, y menos Pedro Canihuante, quien acaba de llegar.

Una cosa es el decir y otra cosa es el ser.

Director, el origen de los elementos que hemos planteado en las preguntas, no es de personas molestas y tristes, si es que esa es su apreciación. He sido cercano al gobierno y a todos los funcionarios, y más que nada al Estado de Chile, a la República de Chile, y siempre hemos señalado que, independiente del color político de quién haga las cosas, bien o mal, recibirá felicitaciones o un tirón de orejas.

Como tenemos tantas dudas, y como tenemos nombres y apellidos, finalmente, haremos un informe que seguramente irá al Ministerio Público, a Contraloría y, tal vez, a la prensa, pues tenemos la obligación de requerir toda esa información. Por lo tanto, queda citado para la próxima sesión.

Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.

-Se levantó la sesión a las 10.30 horas.

ALEJANDRO ZAMORA RODRÍGUEZ,
Redactor
Jefe Taquígrafos Comisiones.